

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 17º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-8280-2021
CARATULADO : VÁSQUEZ/CON DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, veintiocho de Agosto de dos mil veintitrés

VISTOS:

Con fecha 14 de octubre de 2021, a través de presentación ingresada por oficina judicial virtual, comparecen don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda y don Eduardo Armando García Ramos, abogados, en representación de doña **Cecilia Rosa Reyes Rodríguez**, manipuladora de alimentos y de doña **Cynthia Francesca Vásquez Reyes**, técnico en enfermería, todos con domicilio en Pasaje N° 28 oriente N° 6561 de la comuna de La Granja, quienes interponen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra del **Fisco de Chile**, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Indica que *el* demandante (sic) se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, contemplada en la Ley N° 20405 publicada el 10 de diciembre de 2009, conocida como la Comisión Valech II bajo el N° 7271, creada con el objeto de suplir las carencias de la “Comisión Rettig”, que sólo pudo pronunciarse sobre quienes habían muerto a manos de agentes del Estado, no contemplando las torturas y prisiones.

Añade que doña Cynthia Francesca Vásquez Reyes es demandante por repercusión, al ser hija de la demandante principal.

A continuación transcribe en primera persona el relato de la demandante doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez, quien señala que junto a su compañero, de nombre Orlando Vásquez Ramírez, quien siempre fue un luchador social, vivían en la casa de su suegro, don Sergio Vásquez, en pasaje 28 Oriente N° 6559 de la Población Joao Goulart, comuna de La Granja, siendo una familia que participaba en las actividades de la iglesia y activamente en la contingencia del país en aquellos difíciles años.

Relata que el día 26 de mayo del año 1988, aproximadamente a las 3 de la madrugada, se encontraba durmiendo junto a su hija Cinthya, quién tenía un año cuatro meses de edad. Despertaron sobresaltados pues sintieron ruido de ventanas quebradas, puertas que se rompían y disparos. Luego entraron muchas personas a la casa, todos con pasamontañas y brazaletes, algunos de color verde oliva y otros rojos con negro, llevando armas como pistolas y fusiles, sin identificación. Así fue como tomaron detenido a don Orlando Vásquez Ramírez e inmediatamente le comenzaron a preguntar por las armas de Carrizal Bajo, después lo sacaron al patio de la casa.



Foja: 1

Dice que pasado un tiempo, las personas se identificaron como agentes de la Central Nacional de Inteligencia, mencionando que estaban buscando armas; y en ese afán dieron vuelta todo, rompieron la cuna de su hija, los sillones, para después encerrarla con su hija en el dormitorio, mientras tenían a sus sobrinas en el segundo piso. Comenzaron a preguntarle qué hacía ella, si participaba en protestas, asaltos o quemando neumáticos. Permanecieron en la casa alrededor de dos horas y en algún momento trataron de ingresar un bolso de color negro y grande, que piensa pudo tratarse de armas para incriminarlos, pero su cuñada se opuso a que entraran cualquier cosa.

Cuando se llevaban al Sr. Orlando Vásquez le indicaron que lo llevarían al cuartel de General Mackenna.

Califica ese allanamiento y la detención del Sr. Vásquez como un atentado a la vida y dignidad familiar, pues durante la noche iban y volvían, impidiéndoles dormir.

Cuenta que al día siguiente junto a su cuñada fue a saber sobre el estado de don Orlando, encontrándose con muchos vecinos de la Población Yungay, con lo que se dio cuenta que no eran la única familia afectada con la redada y allanamientos, lo que fue una pesadilla para toda la población pues eran muchos los detenidos.

Reseña que en la noche siguiente los agentes de la Central Nacional de Inteligencia regresaron a su casa, preguntando dónde estaba las armas, momento en que la tomaron detenida y la llevaron a los límites del parque Brasil, muy cercano a su casa; la hicieron bajar de una camioneta grande y comenzaron a preguntarle dónde estaban las armas y ella les contestaba que no sabía de qué me hablaban; comenzaron los golpes de puños, puntapiés y manotazos en la cara; le dijeron que la llevarían al cuartel para interrogarla, le vendaron la vista, la subieron a golpes al vehículo y la trasladaron al cuartel de calle General Mackenna, lugar en que volvieron a identificarse como personal de la CNI. Le advirtieron que sólo tenía una alternativa para seguir viviendo, y era reconocer los supuestos atentados que habría cometido su marido don Orlando Vásquez.

Agrega que después la llevaron a un subterráneo húmedo y de mal olor donde le quitaron la ropa y le pusieron algo parecido a una faja. La sentaron en una silla, le amarraron los pies y manos y le aplicaron golpes de electricidad en sus partes íntimas. Fueron tratos vejatorios y dolorosos que le cuesta describir y sólo quiere olvidar, pues ello dejó una marca en su vida, una cicatriz imborrable. Les dijo que no iba a reconocer nada, entonces la arrastraron por un pasillo del pelo, mientras ella gritaba que pertenecía a una iglesia, pero insistieron en acusarla de andar en protestas quemando neumáticos y realizando asaltos.

Cuenta que fue así como la llevaron a otro subterráneo donde la dejaron sentada y vendada en un espacio frío y oscuro donde había más gente. Llegó a su lado doña Nancy Rivera que también había sido torturada



Foja: 1

y le dijo “*te van a poner corriente en la vagina, en los senos. No tienes que decirles nada*”. Después de un momento llegaron unos agentes a pasar lista de los detenidos, y ahí puso comprobar que don Orlando se encontraba en el mismo lugar, y gritando instó por su liberación, pero lo golpearon violentamente e hicieron callar.

Posteriormente la llevaron a una celda o calabozo, le quitaron la venda y la mantuvieron allí parte de la noche, pero de manera repentina, en algún momento, la sacaron y subieron a una camioneta junto a otra persona que estaba detenida de nombre Juan López Avendaño. Dieron una vuelta de aproximadamente una hora. Al volver les dijeron que miraran “*la moto*” mientras se reían y además “*Si ustedes hablan los vamos a matar*”.

Luego la trasladaron a otro lugar en un subterráneo donde le sacaron la venda. Ella pensó que volverían a torturarla, pues le mostraron una silla parecida a las que usan las matronas, vio muchos papeles higiénicos con sangre y heces. La volvieron a vendar y la sentaron en un escalón donde escuchaba música a muy alto volumen y gritos. Sentaron a una persona que se quejaba a su lado. Luego de unos momentos le preguntó quién era y él le contestó “Soy el Orlando”. Entonces se puso a llorar y le dijo que ella era Ceci. Ante eso su pareja le dijo que no hablara, que tenía que irse y salir de allí.

Indica que estuvo cerca de una hora sentada en ese escalón. Luego se llevaron a don Orlando y a ella la dejaron buena parte del día encerrada. Posteriormente la sacaron de allí y comenzaron a golpearla sin decir nada, pero llegó algún mando superior y los instruyó que se detuvieran y la devolvieron al mismo calabozo y después a una sala donde le sacaron fotos de lado y de frente, le marcaron los dedos y le dijeron “mira huevona, todo lo que viste y escuchaste no se lo puedes contar a nadie. Si sabemos que lo has hecho vamos a matar a Orlando y después te iremos a buscar a ti”. Debió firmar una hoja en blanco y le dijeron que podía irse. Así fue liberada como a las 10 de la noche del mismo día 27 de mayo.

Expone que al día siguiente fue a la Vicaría de la Solidaridad para recibir asistencia jurídica en la detención de su marido, y gracias a ellos esa carga se alivió, recibiendo ayuda –también– de los psicólogos, abogados y de las Iglesias Cristianas.

Arguye que todo esto sólo sucedió porque su marido era un luchador social contra la dictadura y en definitiva estuvo 3 años y medio encarcelado.

Afirma que ellos estuvieron 6 meses con allanamientos continuos que les impedían dormir y los vigilaban constantemente. Interpusieron recursos de amparo por seguimiento, detenciones arbitrarias y amenazas. Es más, cuando don Orlando salió en libertad, después de más de tres años, lo seguían y hostigaban constantemente. Cuenta un hecho en concreto, una ocasión en que iban en una micro por el centro de Santiago y unos sujetos de civil pararon el móvil y se llevaron detenido al Sr. Vásquez sin explicaciones.



Foja: 1

Indica que quedó con secuelas físicas y psicológicas: Quedó sorda de un oído por los golpes recibidos en la cabeza durante la detención; le pegaron en los senos y tiene un pequeño tumor benigno por un hematoma. Sufre de mucha depresión, acentuada desde la partida de su compañero en el año 2019, cuando se encuentra con uniformados o carabineros se pone nerviosa, se altera mucho, y le cuesta bastante tratar de mantenerse tranquila y controlarse. Añade que destruyeron la dignidad de su familia y que nada volvió a ser como antes.

Bajo el subtítulo “El derecho” indica que los hechos relatados se catalogan como crímenes de lesa humanidad según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998.

A continuación se refiere a la responsabilidad del Estado y sus fundamentos constitucionales, refiriéndose al artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República y el artículo 1 inciso cuarto y artículo 5 inciso segundo, citando jurisprudencia.

Arguye que el conjunto de normas y principios de la responsabilidad del Estado en la esfera del Derecho Internacional, en cuanto conjunto, no ha hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se han venido desarrollando por más de un siglo. El Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (Art. 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia) ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derecho esenciales del hombre” por parte de los Estados, quienes en materia de derechos humanos tiene una obligación de resultado, cual es su efectiva vigencia; siendo entonces una cuestión objetiva en la que no interesa la presencia de dolo o culpa pues la responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas.

Añade que para el caso sub lite resulta improcedente la aplicación de las normas y principios del derecho privado, requiriéndose una aplicación armónica de la Constitución Política del Estado, de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos y de la Ley General de Bases de la Administración del Estado. Seguidamente cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Ilhma. Corte de Apelaciones de Santiago.



Seguidamente expone la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en materia de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad como es el caso de autos, por encontrarse gobernada bajo normas de carácter público o internacional. Esgrime que en toda sociedad democrática y respetuosa de las libertades de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona –derechos que, por lo demás, se hallan protegidos por los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos y por los N° 1 y 7 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental- constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

Por su parte, la citada Convención Americana –tratado internacional ratificado por Chile y actualmente vigente en su territorio por la vía del artículo 5° inciso 2°, de la Constitución Política- señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha Convención. Y si bien es cierto que ninguna disposición de la Convención señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Administrativo y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Agrega que la misma conclusión que fluye de una revisión somera de la extensa reglamentación internacional sobre la materia, que expone latamente y seguidamente cita jurisprudencia de los Tribunales Superiores de nuestro país.

A continuación se refiere a la responsabilidad objetiva del Estado, lo que determina que para la procedencia de la responsabilidad estatal, el agraviado debe probar únicamente la existencia de daño o perjuicio provocado; y la actividad (o inactividad) del órgano del estado que lo genera, y desde luego la relación de causalidad.

En cuanto a la existencia del daño o lesión cita a don Enrique Barros Bourie, agregando que actualmente nadie podría negar la procedencia del daño moral en el marco de la responsabilidad, encontrando aquello su fundamento en nuestra propia Carta Fundamental, pues, en efecto, el aporte más relevante del texto Constitucional a la teoría de la resarcibilidad del daño moral ha sido la consagración como derechos fundamentales de las personas y merecedores de tutela jurisdiccional derechos no económicos como la vida, la integridad psíquica y física, la vida privada, la honra de la persona y su familia. La tesis de la “constitucionalización del Derecho Civil”, ha abonado la postura de que “el daño moral debe ser indemnizado



Foja: 1

incluso con mayores razones constitucionales que el daño meramente patrimonial” Así lo indica doña Carmen Domínguez Hidalgo, que los tribunales, en virtud del principio de legalidad establecido en el artículo 6 de la Constitución, deben brindar una protección adecuada a estos derechos, concediendo la reparación integral de los daños causados. Al no excluir la Constitución el daño moral (salvo en el supuesto de expropiación: art. 19 N° 24), la reparación puede comprender sin problema dicho daño.

Respecto de la causalidad, alega que no existe duda respecto a su concurrencia, pues el mismo Estado de Chile ha reconocido su calidad de *torturado* (sic) consignándose en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (llamado coloquialmente Informe Valech II) con el número de identificación 6.297 (sic).

En cuanto al daño provocado y el monto de indemnización, señaló que en este caso existe un perjuicio de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima que vivió en carne propia y que amerita ser reparado a través de una indemnización.

Luego de referirse al concepto de daño moral en la doctrina nacional, hace una referencia a lo que nuestros Tribunales Superiores de Justicia han definido por tal y cita jurisprudencia internacional.

Previas citas legales, pide tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, acogerla a tramitación y, en definitiva, aceptarla en todas sus partes condenando al demandado a pagar la suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos), para el demandante principal doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez y el monto de \$100.000.000.- (cien millones de pesos) para doña Cynthia Francesca Vásquez Reyes, por concepto de daño moral, o la suma que determine el Tribunal, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de la demanda y el pago efectivo de la indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, con costas.

Con fecha 01 de febrero de 2022, según estampado receptorial de folio 7, consta haberse notificado la demanda a don Juan Antonio Peribonio, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A través de presentación ingresada el 22 de febrero de 2022 a folio 9, comparece doña Ruth Israel López, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contestó la demanda solicitando su rechazo conforme a los argumentos que expone.

Tras efectuar un pequeño resumen de lo pedido, hace presente que doña Cynthia Francesca Vásquez Rodríguez, quien comparece invocando un daño moral propio, no ha sido reconocida como víctima de violaciones a los derechos humanos, por parte de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, por lo que controvierte los presupuestos de su demanda,



Foja: 1

los que deberán ser acreditados, en tanto son necesarios para que proceda una indemnización a su respecto, no siendo suficiente la mera invocación de la relación de parentesco o cercanía con la víctima directa de prisión política y torturas.

A continuación alega la falta de legitimación activa de doña Cynthia Francesca Vásquez Rodríguez en tanto hija de la víctima directa, pues comparece al juicio en calidad de víctima por repercusión o rebote por torturas y prisión política de su madre y no de ella misma, a pesar de que no figura en ninguno de los informes emitidos por la Comisión Valech, por lo que al no tener la calidad de víctima, carece de legitimación activa para interponer la demanda.

Agrega que es la madre de esta demandante, quien sí fuera reconocida directamente como víctima de prisión política y torturas, es decir, es la legitimada activa para demandar, también comparece en autos pretendiendo una indemnización por el daño moral sufrido.

Argumenta que en este contexto, el daño, para ser indemnizado debe ser personal, actual, real y cierto, lo que significa que sólo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación; y si bien el daño reflejo o por repercusión se puede considerar un daño personal, este sólo puede ser indemnizado cuando está dentro de ciertos límites. En el caso de autos, sin restar gravedad a los hechos relatados en el libelo, no podría considerarse que se encuentra englobado en ninguno de los dos casos que la doctrina y la jurisprudencia han planteado como causantes de daño reflejo: muerte o incapacidad. Estima que extender el daño mora por repercusión a extremos tales como los descritos en la demanda, ocurridos hace décadas, donde la víctima directa y titular de la acción comparece en estos mismos autos demandando la indemnización que pudiese corresponderle, genera un injusto que afecta a la legitimidad del interés protegido con la responsabilidad civil, lo que deviene en que la acción debe ser rechazada.

En subsidio, alega la improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas por doña Cynthia Francesca Vásquez Rodríguez, por limitaciones de la justicia transicional, además de haber sido ya reparadas.

Razona que la indemnización pedida se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos cuya comprensión se da en el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional y sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria, porque en ese ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas, pues no debe omitirse que las arcas fiscales deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad, sin que lo anterior pueda ser un factor que impida considerar la reparación



Foja: 1

pecuniaria de aquellos que son y fueron los directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos acontecidos en Chile.

Agrega que no es extraño que muchos de los sistemas indemnizatorios creados en el marco de la Justicia Transicional privilegien a algunos grupos en desmedro de otros, se compensen algunos daños y se excluyan otros, o se fijen legalmente luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas especiales de reparación. Así la Ley N° 19.992 ha constituido un esfuerzo trascendental de reparación, pues mediante ella se hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de prisión política y tortura mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público; esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley N° 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley N° 19.992; c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- y d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.- En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Añade que la Ley N° 19.992 y sus modificaciones, estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, la ley N° 20.874 determinó un Aporte Único de Reparación, por \$1.000.000.- para cada una de las víctimas individualizadas en las nóminas Valech y de \$600.000.- a favor de cada una de las viudas de dichas víctimas.

Como puede apreciarse –adiciona- el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones ha sido alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la Justicia Transicional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares. Y así, para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que



Foja: 1

optó por beneficiar a la víctima de prisión política y tortura, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral, lo que no es ajeno a otras normativas en que, ante el *pretium doloris*, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.

Arguye que es claro que, siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso de autos, han sido preteridos por la ley como beneficiarios de una asignación en dinero por el daño que invocan, en beneficio de la víctima, sin que ello implique afirmar que no hayan obtenido una reparación satisfactiva por otra vía, como se explicará más adelante.

Estima así que la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los parientes, siendo titulares de la acción de reparación los afectados directamente por el daño.

En cuarto lugar de sus defensas, el Fisco de Chile esgrime que sin perjuicio de lo ya expuesto, los demandantes han obtenido igualmente otra forma de reparación satisfactiva, ya que el hecho que no hayan tenido derecho a un pago en dinero -por preterición legal- no significa que no haya obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de él.

Reitera que tratándose de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto puramente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en este caso, y que vinieron a satisfacer el daño moral sufrido.

Continúa exponiendo que no debe olvidarse que, desde la perspectiva de la víctima por repercusión, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada, pues mal que mal, el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables, no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis, se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación, que incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la



Foja: 1

simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones políticas. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.

Al respecto, la llamada Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias, y ello se desprende del concepto que el Ejecutivo, – siguiendo el referido Informe de la Comisión–, entendió por reparación, esto es: *“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”*. De esta forma, en la discusión de la ley N° 19.123, en diversas oportunidades, se hizo referencia a la reparación “moral” buscada por el proyecto. Es así como la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias – sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Luego de citar doctrina, indica que en el caso de personas como las de autos, las reparaciones satisfactivas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, el establecimiento mediante el Decreto N° 121, de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros.

Añade como conclusión que el cúmulo de reparaciones indicadas ha producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus argumentos.

Reclama que dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones provocando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de la reparación. Concluye que estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias que enunció anteriormente, y de acuerdo a los documentos oficiales que dice acompañará a los autos, opone la excepción de reparación satisfactiva por



Foja: 1

haber sido ya indemnizada la parte demandante en su calidad de hija de doña Cecilia Reyes Rodríguez.

En quinto lugar, opone excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido la demandante doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez, en tanto víctima directa, ya indemnizado. Indica que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a Derechos Humanos sino se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional.

En efecto, continúa, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior -y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada Justicia Transicional. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

Agrega que, en efecto, el denominado dilema "justicia versus paz" es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. Por otro lado, manifiesta que no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Señala que estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ellas. Asevera que no debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan



Foja: 1

otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Seguidamente, expone la complejidad reparatoria, citando a Lira, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente don Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron "(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados: y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse".

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas".

Refiere que en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el ejecutivo, siguiendo aquel informe, entendió por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en un "proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas". Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Añade que, de esta forma, en la discusión de la Ley N° 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación moral y patrimonial buscada por el proyecto. La noción de reparación por el dolor de las vidas perdidas es encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal de indemnización y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la responsabilidad extracontractual del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18. Asumida esta idea reparatoria,



Foja: 1

señala, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

En este sentido, indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones permitirá verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

Bajo el subtítulo “Reparación mediante transferencias directas de dinero”, afirma que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destaca que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, algunos sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero, mientras otros, abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines resarcitorios.

Reitera que al mes de diciembre de 2019 el Estado de Chile ha desembolsado la importante suma total de \$992.084.910.400.-

Manifiesta que, desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que pueda valorizarse para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Indica que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Agrega que como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, obteniéndose de ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Refiere luego, las reparaciones específicas. Ley N° 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos. Señala que la actora ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y sus modificaciones, remitiéndose a lo ya expuesto a propósito de los límites que



Foja: 1

las reparaciones del Estado deben tener en el contexto de la justicia transicional.

Acto seguido, alude a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas. Manifiesta que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación se realiza no sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones.

Hace ver que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del País. Indica que para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Expresa que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y con atención exclusiva a beneficiarios del programa. Adicionalmente, detalla otros tipos de beneficios a los beneficiarios y sus familias, en particular en el ámbito educacional y de vivienda.

Luego se expone respecto de las reparaciones simbólicas, destacando que en los procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se realiza mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, no a través de dinero sino tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y tristeza y con ello reducir el daño moral, medidas que fueron ya reseñadas.

Bajo el subtítulo “identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas”, sostiene que tanto la indemnización que se solicita en autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de manera que no procede repararlos nuevamente.

Acto seguido y en subsidio, alega la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria.

Refiere que -previo a entrar al fondo de la excepción- es necesario considerar que conjuntamente con la víctima directa de los hechos, en esta causa también comparece la hija de ella, pretendiendo una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos por la Sra. Reyes Rodríguez, es decir, del relato de los hechos expuestos en la demanda consta que la hija, doña Cynthia, no fue la directamente afectada por acciones de agentes del Estado, sino que los daños serían una consecuencia de la detención y tortura sufrida por *sus padres* (sic), mas no así por ella misma. Así las cosas, en tanto la aludida



Foja: 1

demandante no es víctima de violaciones a los derechos humanos, no estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad, resultando aplicable la institución de la prescripción.

Indica que de conformidad a los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, en relación al relato efectuado por las demandante, la detención ilegal, prisión y torturas que sufrió doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez ocurrió a partir del 26 de mayo de 1988, de manera que entendiendo suspendida la prescripción durante el periodo de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, el 01 de febrero de 2022, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332. Luego, en subsidio de lo anterior, opone excepción de prescripción de 5 años de conformidad a los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.

Ahondando en los argumentos de la prescripción invocada, sostiene que la imprescriptibilidad de las acciones es excepcional, requiriendo siempre una declaración explícita, la que en este caso no existe. Añade que las normas de prescripción se aplican a favor y en contra del Estado. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus alegaciones.

Por otro lado, expone que los tratados internacionales invocados por el actor, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil, sino únicamente se refieren a la responsabilidad penal, citando jurisprudencia en este sentido.

Finalmente, postula que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, esto es, el artículo 2332 del Código Civil, citando jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

En último término, en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, se refiere al daño e indemnización reclamada.

En primer término y en cuanto al daño pretendido por la hija de la víctima directa doña Cynthia Francesca Vásquez Rodríguez, hace presente que debe considerarse la controversia de los hechos que ha efectuado y sus consecuencias jurídicas, es decir, que los actores deberán acreditar las circunstancias fáctica de los daños pretendidos, así como su existencia, y el vínculo de causalidad entre éstos. Añade que se debe tener presente que la demandante, a la época de los hechos sufridos por su madre, tenía 1 año y 4 meses de edad, lo cual lógicamente diluye el vínculo de causalidad entre el hecho base y los daños pretendidos a su respecto, por cuanto los perjuicios que señala haber sufrido podrían tener una multiplicidad de causas distintas a la detención sufrida por su madre en el año 1988. De este modo, no existiendo una relación de causalidad entre tales episodios de prisión y torturas y los perjuicios pretendidos a su respecto, la demanda interpuesta a su respecto no podría prosperar.



Foja: 1

Finalmente, respecto de la hija de la demandante principal, en el eventual caso de acogerse una indemnización a su respecto, esta no podría ser el mismo monto para la víctima directa de prisión y tortura. Los perjuicios sufridos por la víctima directa, del cual dio cuenta ante la Comisión Valech, supuso importantes dolores físicos con eventuales consecuencias posteriores, el cual no puede considerarse del mismo modo que a su hija, quien no sufrió directamente tales graves violaciones a sus derechos humanos.

Luego de definir el daño moral, indica que dependerá de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en la demanda y la prueba que se rinda; pero esta tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, pero que busca principalmente atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

En subsidio de las excepciones anteriores, solicita que la regulación del daño moral considere los pagos ya recibidos del Estado (Ley N° 19.992, sus modificaciones y demás normas pertinentes), y que seguirá percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. Indica que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Por otro lado, indica que los intereses se deben solo cuando el deudor ha sido reconvenido y retardado el cumplimiento de la sentencia.

Con fecha 01 de marzo de 2022 a folio 13, la demandante evacuó su réplica, reiterando los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda y pide el rechazo de todas las excepciones, defensas y alegaciones de la demandada, haciendo presente que el Fisco de Chile no ha discutido ni controvertido los hechos dañosos que sirven de base a la demanda.

En cuanto a la excepción de pago o de reparación integral expone que los fundamentos que la sustentan controvierten el principio general de la reparación integral del daño y que las pensiones de sobrevivencia no pues ella en ningún caso cumple con los estándares de la justicia transicional, como lo ha enunciado en su demanda y tampoco repara íntegramente el dolor experimentado.

Aduce -en lo medular- que el artículo 2 de la Ley N° 19.123 establece que le corresponderá especialmente a la Corporación promover la reparación del daño moral a las víctimas, lo que no es sinónimo de reparar, como ocurre en el caso de autos; añadiendo que el mismo cuerpo legal no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual



Foja: 1

indemnización de perjuicios que repare el daño moral, como lo dispone el artículo 24.

Así, el intérprete de la ley no podría descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el sólo hecho de haber mediado el pago de una pensión austera y simbólica, igual para todas las víctimas reconocidas versus demandar por daños en sede civil por el daño concretamente sufrido.

Añade que la jurisprudencia citada por el demandado ha sido superada, como ocurre en los múltiples casos que cita.

Seguidamente se refiere a la improcedencia de la excepción de prescripción extintiva, mencionado que si bien alguna vez existió un debate dogmático sobre la naturaleza de la responsabilidad del Estado y el estatuto jurídico aplicable a la reparación por crímenes de lesa humanidad, el mismo se ha asentado en los últimos años a favor de la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias de este tipo, lo cual ha sido refrendado por el Estado Chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018, ante el Comité contra la Tortura en Ginebra en 2018, o ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas a principios de abril de 2019 en Ginebra, de modo tal que no resulta procedente la aplicación de las normas del título XXXV del Libro IV del Código Civil y las reglas referidas a la prescripción extintiva.

Manifiesta que la reciente jurisprudencia del máximo tribunal de la República, en coincidencia con el Derecho internacional de los Derechos Humanos, ha variado el criterio reconociendo el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles o reparatorias que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos, concediendo así la correspondiente indemnización, lo que ha sido ratificado por los Tribunales internacionales.

Añade que el principio de responsabilidad del Estado es de la esencia de un estado constitucional de derecho.

En relación al monto demandado, menciona que la normativa vigente exige efectuar peticiones concretas, sin perjuicio de haberse entregado amplias facultades al Tribunal para determinar la cuantía del mismo.

Finalmente, expone que la reajustabilidad está ligada a la reparación integral o plena, y del pago efectivo de las obligaciones, pues la desvalorización monetaria es algo que afecta a cualquier tipo de indemnización, por lo cual, es necesario acudir a un índice de reajustabilidad. Respecto de los intereses cita doctrina.

Con fecha 11 de marzo de 2022 a folio 15, la demandada duplicó, ratificando la totalidad de las argumentaciones ya vertidas en la contestación de la demanda.

Añade que debe rechazarse el postulado de la demandante en cuanto a su excepción de reparación integral, pues el Estado de Chile adoptó una política integral de reparación tanto en dinero, beneficios de salud, construcción de memoriales, etc. y por eso es integral y no sólo una



«RIT»

Foja: 1

denominación. Si solo considerara lo que significa en gastos para el Estado y la sociedad en su conjunto resulta claro que persiguió reparar el daño moral. Por otra parte, tampoco puede ser considerada una indemnización fijada unilateralmente, pues desde el momento que el demandante aceptó esta pensión de reparación, aceptó el monto y las condiciones de esta reparación del daño moral sufrido, de modo que ahora no puede desconocer sus efectos.

Reitera que la pensión otorgada por la ley 19.992 tuvo un claro fin reparatorio del daño moral y nunca tuvo el carácter de “*pensión de sobrevivencia*” como la han llamado, citando jurisprudencia.

Repite sus alegaciones en torno a la pretensión de doña Cynthia Francesca Vásquez Rodríguez quien demanda en calidad de víctima por repercusión o rebote, por torturas y prisión política de su madre, y no de ella misma.

En cuanto a la prescripción invocada hace presente que durante más de 10 años la Corte Suprema consideró que la acción prescribía conforme a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, en 4 años, transcribiendo algunas consideraciones de sentencias que cita, por lo que la esta no ha sido una cuestión pacífica.

Por último, reafirma que en la eventualidad de ser condenada y tratándose de una obligación de responsabilidad extracontractual, los reajustes sólo podrían devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, es decir, los reajustes que legalmente procedieren, de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Por resolución de 15 de marzo de 2022 a folio 18, se recibió la causa a prueba por el término legal.

Con fecha 06 de enero de 2023 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en estos autos, doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez y doña Cynthia Francesca Vásquez, debidamente representadas, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por don Juan Antonio Peribonio Poduje, todos ya individualizados, a fin de que sea condenado al pago de la suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos) y \$100.000.000.- (cien millones de pesos) –respectivamente- por los daños morales sufridos a consecuencia de los hechos de que fue víctima directa la Señora Reyes Rodríguez al haber sido sacada desde su hogar la noche del día 27 de mayo del año 1988, detenida ilegalmente por agentes del Estado, trasladada a lugares de detención, siendo sometida a torturas y vejaciones, interrogatorios y tratos cruentos e inhumanos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MCXXXHVGWPX

SEGUNDO: Que por su parte el demandado Fisco Chile contestó y duplicó la demanda, solicitando su rechazo en todas sus partes, controvirtiendo los hechos respecto de la demandante doña Cynthia Francesca Vásquez Reyes y alegando –en síntesis- la falta de legitimación activa de dicha demandante y, en subsidio, la improcedencia de las indemnizaciones por limitaciones de la justicia transicional y por ya haber sido reparada.

Ademas invocó como defensa que las demandantes han obtenido otras formas de reparación satisfactiva y la de improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizada la demandante Sra. Reyes Rodríguez.

Seguidamente, alega la prescripción extintiva de la acción por haber transcurrido en exceso el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2332 del Código Civil cuya aplicación estima procedente, y en subsidio, la prescripción extintiva ordinaria de 5 años, objetando, en subsidio de todo lo anterior, el monto indemnizatorio exigido por el actor a título de daño moral, solicitando que en la regulación de éste se consideren los pagos, pensiones e indemnizaciones que ha recibido la parte demandante.

TERCERO: Que la presente controversia radica en determinar si en la especie concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial del Estado y, en consecuencia, si el Fisco se encuentra obligado a indemnizar el daño moral reclamado por las actoras, fundado en la detención ilegal y tortura que experimentó doña Cecilia Reyes en el contexto político del régimen militar de 1973.

CUARTO: Que la responsabilidad civil tiene por finalidad reparar económicamente a la víctima o con mayor precisión, compensar el daño sufrido por ésta como consecuencia de un hecho ilícito. En este sentido, lo que se busca es proporcionar a la víctima, una cantidad de dinero que le permita sobrellevar de mejor manera el daño sufrido, mediante el goce y disfrute de otras cosas, atendido el carácter transaccional de éste. En razón de ello, se dice que la indemnización monetaria no es una genuina reparación, pues no hace desaparecer el daño ni mucho menos el hecho generador de éste, sino que más bien, otorga los medios económicos a la víctima para que ésta encuentre satisfacción en la adquisición de bienes o servicios.

QUINTO: Que, en lo concerniente a la responsabilidad del Estado y sus órganos, el principio general expresado anteriormente se ha concretizado bajo la institución de la falta de servicio, criterio general de atribución equivalente a la culpa o negligencia que funda la reparación de los daños extracontractuales. De aquí que la doctrina y jurisprudencia, estimen que la responsabilidad civil o patrimonial de los órganos públicos puede ser perseguida, ya sea de acuerdo a las normas de derecho público (Constitución Política de la República, Ley de Bases Generales de la



Foja: 1

Administración del Estado, etc.), como a partir de la normativa de derecho privado (arts. 2314 y ss. del Código Civil).

SEXTO: Que en este sentido si bien en la actualidad, es un lugar común hablar de la unidad de responsabilidades públicas y privadas a fin de garantizar reglas y principios equitativos para los particulares que buscan la reparación de sus daños ocasionados por el Estado, ello no conlleva un desconocimiento de las peculiaridades de las relaciones de derecho público (administrativa, legislativa y judicial), en particular, respecto del complejo contenido y finalidad que el órgano estatal persigue con cada una de sus actuaciones.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados al actor, encuentra también su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

OCTAVO: Que estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

NOVENO: Que a fin de acreditar lo correspondiente, la parte demandante acompañó los siguientes documentos a la carpeta electrónica: 1) Certificado de nacimiento de la demandante doña Cynthia Francesca Vásquez Reyes, emitido el 18 de mayo de 2021 por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el que da cuenta de que su nacimiento ocurrió el 09 de enero de 1987, consignándose como su madre a la otra demandante, doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez; 2) Páginas 144 y siguientes del Informe y Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas en la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Valech II), en la que aparece la demandante, doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez, cédula de



Foja: 1

identidad N° 10.150.096-9, bajo el N° 7271; 3) Documento denominado “Norma técnica para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990”, de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud; 4) Informe psicológico de doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez, suscrito por la psicóloga doña Massiel Nicole Cerna Cuevas, sin indicar fecha de su realización; 5) Informe psicológico de doña Cynthia Francesca Vásquez Reyes, sin fecha de emisión, suscrito por la psicóloga doña Massiel Nicole Cerna Cuevas; 6) Copia autorizada de carpeta de ingreso, comprobante de atención y entrega de antecedentes a la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, de doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez, otorgada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos; 7) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Introducción. 8) Copias del Capítulos V del mismo documento, referido a Métodos de Tortura: Humillaciones y vejámenes, golpizas reiteradas, lesiones corporales deliberadas, amenazas, aplicación de electricidad, presenciar tortura de otros, agresiones y violencia sexuales, privaciones deliberadas de medios de vida, privación o interrupción del sueño, exposición a temperaturas extremas, confinamiento en condiciones inhumanas, posiciones forzadas y desnudamiento.

DÉCIMO: Que, además a folio 31 la parte demandante acompañó oficio respuesta del Instituto de Previsión Social, el que informa acerca de los beneficios de reparación -como beneficiaria de las Leyes N°s 19.234, 19.992, 20.134 y 20.874- se han otorgado a doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez, que en síntesis consigna que aquella, ha recibido la cantidad de \$21.501.140.- entre octubre de 2011 a febrero de 2022, más aporte único Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$400.374.-, ascendiendo la pensión actual Valech a \$207.774.-. Asimismo en beneficiaria de pensión de viudez.

UNDÉCIMO: Que con el mérito de la prueba producida por la demandante, de conformidad a lo prescrito por los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, se tiene por establecido –amen el reconocimiento del Fisco- que doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez fue calificada como víctima por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura incluyéndose en la Nómina bajo el N° 7271, así como de la información remitida por el Instituto de Previsión Social, asociado a los beneficios pecuniarios que esta demandante ha recibido desde el año 2011 a la fecha.

En particular, el relato de la demandante Sra. Reyes Rodríguez impresiona como veraz, plausible y concordante con las demás probanzas rendidas en la carpeta electrónica, en especial por los documentos consistentes en copias de los antecedentes del demandante en su carpeta de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos,



Foja: 1

Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, de 24 de febrero de 2010, en el que consigna el relato que hiciera a esa fecha, en cuanto a que el día 26 de mayo del año 1988 agentes del Estado concurrieron a su domicilio de Pasaje 28 Oriente N° 6559 de la comuna de La Granja, aproximadamente a las 3 de la mañana mientras dormía junto a su marido y su hija de 1 año 4 meses, sintieron ruido, quebrazón de ventanas y otros enseres, y vieron entrar a muchas personas encapuchadas, todos armados, quienes tomaron detenido a su pareja y lo sacaron al patio; quienes luego se identificaron como agentes de la CNI (Central Nacional de Inteligencia) y que buscaban armas, revolvinedo todo e interrogandolos y se llevaron a su marido; que a la noche siguiente, volvieron a su hogar agentes de seguridad y luego de preguntarle dónde estaban las armas, la detuvieron, trasladándola, propinándole golpes de puño y pies, le vendaron los ojos y le dijeron que la llevarían a interrogación en el cuartel de General Mackenna, donde fue maniatada y sometida a tortura con aplicación de electricidad en sus partes íntimas; fue arrastrada por un pasillo agarrándola por los cabellos; le sacaron fotos y le advirtieron con insultos que no dijera nada de lo que había visto y oído, amenazándola con matar a su cónyuge y a ella. Fue liberada a las 22:00 horas aproximadamente.

Que además, en las copias autorizadas del mismo expediente se acompaña un certificado fechado el 15 de mayo de 2008, suscrito por doña María Paz Vergara Low, Secretaria Ejecutiva de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, en el que se indica que la demandante Sra. Reyes Rodríguez fue atendida por el Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, desde mayo de 1988 y que en sus archivos se consigna que ella fue detenida en la madrugada del 27 de mayo de 1988 por efectivos de la Brigada Investigadora de Asaltos de Investigaciones, durante un allanamiento, siendo trasladada al cuartel general, donde se le interrogó. Agrega que por lo hechos se interpusieron los recursos de amparo 302-88 y 309-88.

Asimismo consta copia autorizada de las páginas 23, 78, 79 y 80 del Informe Mensual de la Vicaría de la Solidaridad del mes de mayo de 1988, en los que se indica que la demandante también fue objeto de “manoseos” con comentarios obscenos, y amenazas de violación si no hablaba.

Páginas 9 a 11 de periódico “Las últimas Noticias”, del 6 al 12 de junio de 1988, en el que igualmente se consignan los hechos ocurridos en la Población Yungay relativos al allanamiento en la casa de don Orlando Vásquez, donde se indica que golpearon a las demandantes; y páginas 21 a 23, Revista Análisis, Edición del 6 al 12 de junio de 1988, en el que se aprecia una fotografía de las demandantes en su vivienda y el relato de doña Cecilia Reyes, quien luego de narrar el allanamiento y los golpes que recibió ella y su hija, indicó que los agentes del estado –el día de su detención- la llevaron a un parque cercano donde “*me empezaron a correr mano*”.



DUODÉCIMO: Que en cuanto al primer supuesto, esto es, la existencia de un hecho antijurídico, conforme a la naturaleza de la materia y hechos sobre los que versa la litis, del mérito de las probanzas reseñadas en los motivos anteriores, se tiene por suficientemente acreditado que luego de un allanamiento ocurrido el día 26 de mayo de 1988 en el que se detuvo a su marido. la demandante doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez fue detenida ilegalmente, para posteriormente ser objeto de tocamientos indebidos y trasladada posteriormente al subterráneo del cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile de calle General Mackenna, donde fue objeto de golpizas y tortura con la aplicación de choques eléctricos en partes sensibles e íntimas, durante un interrogatorio, sometida a tratos vejatorios e inhumanos, entre otras situaciones descritas en las consideraciones anteriores, siendo puesta en libertad el mismo día durante la noche.

DÉCIMO TERCERO: Que tales conductas no pueden sino calificarse de constitutivas de actos ilegales y arbitrarios, que afectan lo más esencial de los seres humanos, como la vida, integridad física, libertad y dignidad y que por su extensión y alcance trascienden al propio individuo, afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en el concepto de delito de lesa humanidad.

DÉCIMO QUINTO: Que, en efecto, consta en la documental ofrecida, en particular en el hecho de que la actora sabidamente es reconocida como víctima de violaciones a los derechos humanos como consta en los registros de la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura bajo el N° 7.271, así como el documento emitido por el Instituto de Previsión Social relativo a los beneficios pecuniarios recibidos por la Sra. Reyes Rodríguez desde el año 2011, circunstancias que no fueron controvertidas por el Fisco y por el contrario, fueron corroboradas a través de su relato, antecedentes que constituyen prueba irrefutable de lo que se reclama en autos, y que permiten a esta juez tener por probada la existencia de los hechos antijurídicos que se invocan.

DÉCIMO SEXTO: Que los perjuicios sufridos por el actor aparecen como consecuencia natural y lógica de todo lo vivido, el sometimiento a actos vejatorios, durante un acto intimidatorio como es la detención practicada en su domicilio, las tocamientos y lenguaje de connotación sexual, el traslado a un lugar incierto y en condiciones degradantes como ser vendada, para permanecer detenido y ser sometida a tortura durante un interrogatorio, hechos que indudablemente afectan de sobremanera la vida de cualquier persona, provocando entre otras cosas, trabas para la estabilidad emocional, familiar y social, circunstancias acreditadas por los antecedentes tenidos a la vista, en particular el denominado “Informe Psicológico” expedido por doña Maciel Cerna Cuevas, psicóloga, que en síntesis consigna que la demandante, presenta síntomas de ansiedad y depresión, pero ninguno de ellos es claramente



Foja: 1

predominante. Los síntomas identificados son: anhedonia, estado de ánimo deprimido, reacciones de sobresalto, pesadillas, ansiedad con recurrencia en relación a la violencia experimentada, incremento de reacción de alarma, insomnio, crisis de pánico. Ha cesado la confianza en sí misma, diagnosticando un trastorno mixto de ansiedad y depresión.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que habiéndose acreditado la existencia del hecho dañoso que se reclama de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde pronunciarse sobre las defensas de la demandada.

DÉCIMO OCTAVO: Que en torno a la excepción de *prescripción extintiva* de la acción, incoada plateada por la demandada, huelga tener presente que el hecho que motiva esta acción, es de aquellos que la doctrina y tribunales superiores de justicia reconoce como graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en el motivo 12° ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se vulneraron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

DÉCIMO NOVENO: Que cabe precisar que la acción indemnizatoria que se deduce se encuentra sustentada en las torturas acreditadas que ha sufrido el actor por el Estado Chileno con enorme poder de coerción y uso de fuerza, vulnerándose con aquello lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma última que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes que así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a índole humanitaria proveniente de los derechos de todos ser humano reconocidos en el tratado internacional indicado, que prima de acuerdo a las normas de derecho interno en específico al artículo 2497 del Código Civil.

VIGÉSIMO: Que por otro lado sustenta la tesis de inaplicabilidad de la norma del Código Civil antes mencionada por el artículo 2° de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5° de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en efecto, ya la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no



Foja: 1

prescriben, por lo que resultaría incoherente entender que la acción de reparación está sujeta a normas de prescripción, puesto que ello atenta los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que dado que los Derechos Humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

VIGÉSIMO TERCERO: Que sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

Por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4º la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

VIGÉSIMO CUARTO: Que además no se trata de una acción de indemnización de perjuicios “común” que derive de relaciones contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que como se dijo, nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el *ius cogens*, propias del Derecho Internacional; así y de acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, es así que habiendo ratificado Chile la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma, que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5º de



Foja: 1

la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

VIGÉSIMO QUINTO: Que por otra parte el artículo 2332 del Código Civil señala que: “*las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto*”; el artículo 2514 señala que: “*la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible*”; finalmente el artículo 2515 de igual cuerpo legal señala que el tiempo es de 5 años para las acciones ordinarias.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en ese contexto, el estatuto del derecho privado chileno regula relaciones entre particulares, regidas por los principios de la autonomía de la voluntad y en plano de igualdad, cuestión inaplicable al caso *sub lite*, donde se busca regular y sancionar en el ámbito de derecho público, relaciones verticales del Estado con los particulares, determinando las responsabilidades que éste tenga por las afectaciones de derechos por parte de sus agentes.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que resulta inconcuso que tratándose del resarcimiento de las transgresiones a los Derechos Humanos, la fuente de responsabilidad civil o el estatuto aplicable, no puede encontrarse en nuestro Código Civil, toda vez que las normas de regulación y protección de tales derechos son posteriores a nuestra codificación, y las ahí contenidas no fueron concebidas por Bello para la solución de problemas contemporáneos, como el de marras, para los cuáles ha devenido el desarrollo de nuevas concepciones al amparo del Derecho Internacional, el que incorporado en virtud del artículo 5º de nuestra Constitución Política, resulta absolutamente vinculante y obligatorio.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que así, en el caso *sub lite*, la detención, las tocamientos indebidos, interrogatorio, tortura y vejaciones de que fue sujeto la actora sra. Reyes, constituyen en el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo al margen de la juridicidad y constitucionalidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de *Ius Cogens*, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, en efecto, el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando haya violación de un derecho o libertad habrá derecho al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, y el artículo 1.1 trata de las obligaciones de respeto y garantía por parte de los Estados partes de las disposiciones



«RIT»

Foja: 1

contenidas en tal pacto, relativas al respeto y protección de derechos fundamentales.

TRIGÉSIMO: Que así no resulta posible aplicar las normas del Código Civil y declarar prescritas acciones indemnizatorias ordinarias emanadas de violaciones a derechos fundamentales, por ser contrarias al orden jurídico internacional, que traducido en Convenios y Tratados y por clara disposición constitucional, son vinculantes para Chile, como ha reconocido y declarado abundante jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, entre otros, en el homicidio de Fernando Vergara, los denominados caso Liguíña, Caravana de la Muerte -capítulo San Javier-, Secuestro y Desaparición de Darío Miranda Godoy y Jorge Solovera Gallardo y secuestro y desaparición de Sergio Tormen Méndez.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República establecen los principios de igualdad ante la ley de gobernantes y gobernados, siendo responsables tanto de sus acciones como de sus omisiones, asimismo el artículo 4º de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala que éste será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado, normas que en conjunto con los tratados internacionales vigentes en Chile, reafirman el deber de responder y resarcir los daños, normas que carecerían de toda validez y operatividad de aplicarse las reglas y plazos del derecho común a materias de tan alto dolor y conocimiento público, como son las violaciones a los Derechos Humanos.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, por lo señalado precedentemente, esta sentenciadora estima que los cómputos de los plazos establecidos en los artículos 2332 y 2515 no son aplicables en la especie, entran en directa contradicción con normas internacionales, normas de *Ius Cogens*, el Derecho Consuetudinario y el Derecho Constitucional, desechándose así la prescripción invocada por la demandada.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que seguidamente, en lo tocante a la defensa de la demandada invocada como excepción de “*reparación satisfactiva*”, cabe señalar que de acuerdo a la información remitida por el Instituto de Previsión Social, el demandante ha recibido beneficios pecuniarios por parte del Estado por el hecho de haber sido calificado como víctima de violaciones a los derechos humanos, percibiendo la suma de \$21.501.140.- entre octubre de 2011 a febrero de 2022, más bono Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$400.374.-, ascendiendo la pensión actual Valech a \$207.774.-

Sobre este punto, huelga precisar al respecto que la Ley 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala, dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios a través de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MCXXXHVGWPX

Foja: 1

los cuales el Estado Chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una supuesta incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en este sentido, el propio artículo 4º de la citada ley dispone que: *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

En consecuencia, se concluye que aun cuando el actor es beneficiario, las mencionadas leyes en parte alguna establecieron una incompatibilidad entre los beneficios que otorga y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que asimismo, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral, en consecuencia, los beneficios establecidos en las Leyes 19.123, 19.992 y 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, cuya cuantía y para el caso que sea procedente será determinada en este juicio.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, en consecuencia, la acción de indemnización por daño moral impetrada, en caso alguno resulta incompatible con los beneficios que ha recibido el actor, a cualquier título y en cualquier momento, de manera tal que se rechazará la excepción alegada de reparación satisfactoria,.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, así las cosas, desechadas que fueren las defensas fiscales, y establecida la existencia del ilícito y su relación causal con los daños y perjuicios invocados, habrá de reconocerse a la actora su derecho a ser resarcida.

Que en efecto, a la luz del informe psicológico emitido por la psicóloga doña Massiel Cerna Cuevas, que en síntesis consigna que la Sra. Reyes Rodríguez es una persona a quien se *“[...] afectó de modo particular su vida y de su núcleo familiar, sufriendo daños como amedrentamiento, persecución continua y marginación social. El proyecto vital de la evaluada junto a su pareja, se trunca de forma inesperada, teniendo que adecuar sus proyectos a una nueva realidad, con una situación económica inestable.*

La deterioración de las capacidades psicosociales y los padecimientos psicológicos que afectaron y afectan hoy a la Sra. Cecilia Reyes están ligados de forma estrecha a la tortura y vejámenes a los cuales fue sometida,



Foja: 1

en órganos sensibles del cuerpo humano femenino, sobre todo que aún al momento de la tortura, ella se encontraba amamantado a Cinthya, posterior a esto se le desarrollaron nódulos en las glándulas mamarias. Todo lo cual, reviste las características de un traumatismo extremo. Se agregan a estas experiencias los difíciles y sombríos años siguientes a su detención”, concluyendo que presenta un trastorno mixto de ansiedad y depresión, además de una molestia en el oído derecho que no se ha tratado.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que para la determinación del quantum indemnizatorio, conforme a la prueba idónea rendida por la demandante, se tendrá en especial consideración la edad que tenía a la fecha de los hechos, mujer joven, madre de una pequeña, de la que fue separada, privada además de la figura de su pareja – que también fue detenido- y sujeto de vigilancia por largo tiempo, vejaciones de índole sexual, hechos todos que sin lugar a dudas han de haberle producido un estado de intranquilidad anímico y emocional, que –como reconoce la profesional- interfiere en el establecimiento de sus relaciones y vínculos personales, por siempre, todo lo cual lleva a esta sentenciadora estima fijar prudencialmente en la cantidad de \$25.000.000.- (veinticinco millones de pesos).

TRIGÉSIMO NOVENO: Que seguidamente, en lo que respecta a la parte demandante de doña Cynthia Francesca Vásquez Reyes, hija de la Sra. Reyes Rodríguez, su acción se basa en ser víctima por repercusión.

Que el daño por repercusión o rebote puede entenderse como el que nace a consecuencia del perjuicio provocado a una víctima inicial de un hecho ilícito, y que afecta a personas diversas del sujeto inmediatamente perjudicado. Aunque teóricamente podría pensarse en otras situaciones, el daño por repercusión o rebote se plantea, principalmente en casos de lesiones corporales o muerte de la víctima inicial, dado que junto al obvio perjuicio que sufre el directamente lesionado o fallecido, acontece que su cónyuge, hijos o los otros sujetos que de él dependen o que con él se relacionan, se ven perjudicadas patrimonial o extrapatrimonialmente. En rigor, estos sujetos no son víctimas inmediatas del hecho ilícito, ya que es de entera evidencia que el impacto esencial del suceso lesivo recayó sobre el personalmente lesionado. Sin embargo, a pesar de no haber sido afectados en su persona física, es de igual evidencia que ellos sufren un perjuicio a consecuencia del siniestro, al verse alcanzados en sus sentimientos, en su subsistencia o por los gastos en que deban incurrir derivados de los daños de la víctima inicial. (Elorriaga De Bonis, Fabián. El daño por repercusión o rebote. Revista Chilena de Derecho, Vol. 26 N° 2, página 369).

CUADRAGÉSIMO: Que sin perjuicio de que en autos se encuentra plenamente acreditado que doña Cynthia Francesca Vásquez Reyes es hija de la víctima directa, y que nuestra jurisprudencia ha entendido que generalmente- dicho vínculo es suficiente para presumir la existencia de los daños, lo cierto es que se acude a este, cuando no es posible resarcir a la víctima directa y también cuando se verifica alguna afectación en la esfera



Foja: 1

personal del pariente, y en el caso que nos ocupa el libelo de demanda nunca describe cuáles son los perjuicios que se le provocaron a ella y cómo se relacionan con los hechos de que fuera víctima su madre.

Que en este sentido, es fundamental recalcar que esta demandante, a la fecha de ocurrencia de los hechos, específicamente el día 27 de mayo de 1988, sólo tenía 1 año y 4 meses de edad, cuestión que resulta del todo relevante si se considera que el daño moral que ella reclama, es decir por repercusión o rebote, se conceptualiza bajo un aspecto subjetivo, es decir, la persona que lo padece debe tener conciencia de que lo sufre. Sin perjuicio de lo anterior, resulta claro que la demandante pudo haber sufrido un daño como consecuencia de los hechos que afectaron a su madre, pero dados los antecedentes descritos y reseñados en este fallo resultaba necesario que describiera en qué y cómo se materializaron los perjuicios extrapatrimoniales que demanda, entregando al Tribunal los elementos fácticos sobre los que poder emitir un pronunciamiento debidamente sustentado, debiendo nuevamente recalcar que los hechos se extendieron por casi un día y que la demandante tenía a esa época 1 año y 4 meses de edad.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que así las cosas, pese a ser innegable la existencia de las víctimas por rebote o repercusión, no es menos cierto que dentro de este aspecto del daño, se requiere de su autonomía, es decir, quien resulta lesionado por repercusión reclama la reparación de un daño propio, ejerciendo un derecho originario producto de las heridas en sus afectos y sentimientos; y si bien este puede presumirse en ciertas circunstancias, ello no ocurre en este caso atendida la edad de la demandante a la fecha de ocurrencia de los hechos y el lapso de tiempo por el que se extendió, no existiendo otros antecedentes invocados en la demanda que sustenten su pretensión, razonamientos que necesariamente conllevan al rechazo de la demanda a su respecto.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que atendido el mérito de lo razonado anteriormente y el hecho que la demandada no resultó totalmente vencida, cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:



«RIT»

Foja: 1

I.- Que se **rechazan** las excepciones de reparación del daño y de prescripción deducidas por la demandada;

II.- Que se **acoge parcialmente** la demanda de fecha 14 de octubre de 2021, debiendo el Fisco pagar la suma de \$25.000.000.- (veinticinco millones de pesos) a la demandante doña Cecilia Rosa Reyes Rodríguez, cédula de identidad N° 10.150.096-9, por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral;

III.- Que se rechaza la demanda en lo que atañe a doña Cynthia Francesca Vásquez Reyes, omitiéndose pronunciamiento sobre las defensas invocadas a su respecto por el Fisco de Chile.

IV.- Que la suma ordenada pagar devengará reajustes e intereses desde que el presente fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo.

V.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese, consúltese sino se apelare.

**DECTADA POR DOÑA ROCIO PÉREZ GAMBOA, JUEZA
TITULAR.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de Agosto de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MCXXXHVGWPX